

Hacia una política de convivencia: la experiencia de Medellín

Una descripción de lo que sabemos todos

La violencia urbana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de muchos países, y su superación es el mayor de los desafíos políticos de Colombia para las próximas décadas. Las encuestas muestran que los ciudadanos se preocupan más por la seguridad que por otros problemas urbanos. Ven a sus ciudades como el escenario de una interminable pesadilla, llena de homicidios, atracos callejeros, secuestros, violaciones y una amplia gama de delitos cometidos por una delincuencia cada vez más despiadada y segura. Frente a la impotencia, real o no percibida, de las autoridades, los habitantes urbanos se resignan a vivir en medio del riesgo o apelan a una creciente parafernalia de medidas privadas de protección. La tecnología, que los bandidos no tardan en derrotar, se pone al servicio de sofisticados sistemas para hacer infranqueables puertas o vehículos. Muchos se arman, contribuyendo a una interminable espiral en la que muchos quedan pronto desbordados por los equipos cada vez más poderosos de asesinos o secuestradores. Empresas e individuos con recursos se apoyan en compañías de seguridad y guardaespaldas privados, sin que nadie pueda sustraerse a la duda sobre su lealtad y decisión.

Las autoridades públicas enfrentan estas situaciones con un amplio abanico de políticas, casi siempre centradas en el mejoramiento de la capacidad de acción y vigilancia de los organismos policiales. Sin embargo, y a pesar de la rutinaria letanía que enumera semanal o mensualmente los éxitos policiales, las victorias contra el crimen y el delito, en casi todas partes la violencia sigue creciendo. En casi ninguna parte puede decirse que las políticas adoptadas para controlar la violencia, medidas por la prueba de fuego del número de homicidios, de secuestros, de atracos bancarios o de robos de vehículos (para no hablar de aquellos casos en los que la estadística pública no merece confianza alguna, pues la desconfianza de los ciudadanos ante la eficacia de las autoridades conduce a que las denuncias sean cada vez menores, como ocurre con robos, atracos, violaciones y otras formas de violencia familiar), hayan solucionado el problema.

En el clima de desespero que produce la saturación de violencia, se destruyen rápidamente valores ciudadanos y democráticos. Las personas piden más y más energía a las autoridades, lo que con frecuencia conduce a políticas policiales y legales que reducen las garantías ciudadanas y debilitan el debido proceso judicial. Como aplicación de tales medidas heroicas usualmente tampoco produce resultados satisfactorios, domina un clima de desconfianza generalizada en las autoridades policiales y en la justicia: las personas dejan de creer en la eficacia de normas e institucionales legales, y buscan alternativas por fuera de la ley. Muchos aceptan estrategias violentas de enfrentamiento al crimen y toleran que la Policía realice operaciones de limpieza, o incluso las promueven y estimulan. Otros prefieren organizar formas diversas de autodefensa armada que operan sin las restricciones legales de las autoridades y recurren con frecuencia a aplicar la pena de muerte contra delincuentes e indeseables. Frente al delito, todas las estrategias empiezan a aparecer como válidas. Ante la evidencia de que los delincuentes detenidos salen de nuevo a las calles por la ineficiencia de un sistema judicial desbordado con el incremento de los hechos que debe investigar y sancionar, parece siempre preferible que el delincuente muera, en forma al parecer lícita, en enfrentamientos armados con la Policía –pero en los cuales se espera que no quede ninguna “rata” viva-, o como víctima de grupos clandestinos de justicia privada. La tolerancia frente a la tortura o frente a otras violaciones a los derechos humanos crece y quienes insisten en los derechos de los delincuentes aparecen como “idiotas útiles”

o como personas insensibles que por defender el derecho del malhechor están dispuestos a sacrificar a los ciudadanos buenos y pacíficos.

Este contexto de deslegitimación de la norma hace que buena parte de los ciudadanos, sin dejar de considerarse a sí mismos como honrados, apelen a procedimientos ilegales para defenderse de situaciones que salen de su control. Frente a los reiterados robos, son muchos los que compran sus repuestos o sus radios en los sitios donde se comercia con el producto del delito. Canales informales e ilegales permiten recuperar lo perdido, pagar un rescate, tomar venganza de un agravio. Las reglas públicas naufragan en medio de los arreglos privados, las normas dejan de aplicarse pero, como lo han mostrado dos décadas casi de este proceso, la violencia sigue en aumento.

Medellín: la ciudad más violenta del mundo.

NECROPSIAS POR HOMICIDIO		
No incluye los accidentes de tránsito		
Año	Número de Asesinados	Tasas/100 mil habitantes
1980	713	53.6%
1981	959	70.6%
1982	954	68.8%
1983	924	65.2%
1984	1207	83.3%
1985	1714	115.8%
1986	2066	136.7%
1987	2417	156.5%
1988	3367	213.4%
1989	4099	254.2%
1990	5413	335.2%
1991	6313	383.3%
1992	5747	[346]
1993	5406	318.7%

Durante la década de 1980, o sobre todo a partir de 1985, varios de los fenómenos descritos en los párrafos anteriores se presentaron con insólito vigor en Medellín. Las tasas de homicidio que eran ya elevadas hacia 1980 (53.6), crecieron en forma dramática hasta 1991, cuando se acercaron a 400 muertes por cada 100 mil habitantes, de donde empezaron a descender nuevamente: en 1993 fueron de 315 muertes por 100 mil.

Paralelamente se presentó un fuerte incremento en los secuestros económicos, y aumentó toda la gama de delitos contra la propiedad, ante todo robo de vehículos y atracos armados a establecimientos bancarios.

En Medellín eran evidentes, a veces con especial virulencia, fenómenos que son similares a los que promueven la violencia en otras ciudades de los países en desarrollo. La ciudad creció en forma acelerada en los últimos 60 años, y este crecimiento le trajo una población nueva que no logra un acceso rápido y razonable a los servicios indispensables en la vida urbana.

Muchos de los lugares en los que se estableció la mayoría de la población que llegó después de 1950 fueron barrios ilegales apoyados en invasiones y ocupaciones de hecho. Crecieron en medio de conflictos y enfrentamientos con las autoridades que quedaron identificadas no con la protección de sus habitantes sino con el desalojo y la destrucción de las precarias viviendas. En estos barrios, desarrollados sin ninguna planeación, en sitios de riesgo geológico, sin adecuado equipamiento social, sin espacios públicos ni lugares de encuentro social, adultos y jóvenes enfrentaban un horizonte de posibilidades muy reducido. La mayoría de estos últimos no tenía acceso a los niveles de educación que la vida urbana requiere para ejercer de manera adecuada la ciudadanía o dar entrada al mercado laboral formal. A raíz de las dificultades enfrentadas por la industria para adaptarse a las nuevas condiciones de los mercados nacionales e internacionales, la ciudad ha vivido durante 20 años una tasa de desempleo superior a la del resto de las grandes ciudades colombianas. Tasas de desempleo entre el 12 y el 16% para el conjunto de la fuerza de trabajo, del 20 al 25% para los habitantes de los barrios populares de la ciudad, y cercanas al 30% para los jóvenes de esos barrios, fueron habituales durante toda la década pasada. Esta carencia de oportunidades para los jóvenes, esta situación de No-Futuro, para recordar el nombre de la película que mejor describió la vida de estos nuevos "olvidados", produce habitualmente formas de organización juvenil que bordean la delincuencia y con frecuencia desembocan en ella. Entre decenas de miles de jóvenes que pasan tres o cuatro años de su vida sin un empleo formal y sin ir a la escuela, es natural que muchos de ellos encuentren en la delincuencia una salida aceptable.

Pero lo que dio particular gravedad a la situación de Medellín fue el impacto del narcotráfico sobre diversos aspectos de la vida de la ciudad. A partir de 1978 o 1979 se fue consolidando el poder de tres o cuatro grandes grupos, encabezados por Pablo Escobar, sobre el tráfico de drogas. Este control se apoyó en el ejercicio sin restricciones de la violencia. Además, Escobar estaba decidido a impedir por cualquier medio los obstáculos, legales o policiales, a su actividad. Para ello formó un verdadero ejército privado, y recurrió con mucha frecuencia a contratos de servicios con diversos grupos. Grandes bandas se constituyeron para trabajar para los narcotraficantes y otros grupos, listas a efectuar trabajos por iniciativa propia o por contrato, y por lo general mejor armadas que las muy pobres fuerzas estatales.

La violencia producida por estas bandas generó una lógica inercial y con tendencia al crecimiento, tanto cuantitativo como cualitativo. Por una parte, los miembros de las bandas exitosas se convirtieron en el modelo de una alternativa de vida triunfante, que permitía en pocos meses pasar de la pobreza a la opulencia y a la posesión de vehículos, apartamentos y otros signos de reconocimiento social y emocional. En muchos barrios se formaron bandas de adolescentes, hechas a imagen de las más profesionales creadas por los traficantes de drogas. La existencia de estas bandas y los niveles de agresión que generaban producían a su vez en otros sectores la necesidad de armarse, para protegerse o para anticipar el crecimiento del poder del otro.

Al papel del narcotráfico se añadió el impacto de los grupos guerrilleros, que, tras las negociaciones con el Gobierno en 1983/84, crearon "campamentos urbanos" en los que se dio formación política pero sobre todo entrenamiento militar a grupos de adolescentes que pudieran servir de apoyo urbano en caso de un eventual levantamiento general. La ruptura de las negociaciones en 1985 dejó a estos grupos sin una conducción política, y en medio de un ambiente de violencia promovido por el narcotráfico. Algunos de sus miembros se fueron a la guerrilla, mientras otros reforzaban las organizaciones de delincuentes. Posteriormente, bajo la guía de quienes conservaban un lenguaje político –quizás cada vez menos revolucionario y más comunitario- comenzó un proceso reorganizativo, sobre todo a

partir de 1988, de grupos de defensa de los barrios, quienes con el nombre de “milicias populares”, empezaron a suplantar los ineficaces o ausentes organismos de seguridad estatales y a ejercer un violento control de los barrios centrado en la muerte o el destierro de los delincuentes y apoyado en la cooperación voluntaria o forzada de los habitantes de la comunidad.

Frente a todos estos grupos actuaba un Estado sin respaldo, legitimidad o reconocimiento. En las barriadas, la gran mayoría de la población veía con hostilidad a la Policía: era la que venía a allanar en busca de mafiosos y otros grupos armados, y capturaba a amigos y familiares en medio de operativos relativamente violentos. En efecto, la lucha contra el narcotráfico, que tenía casi una estructura militar, fue haciendo más drásticos y militarizados los métodos policiales. Ante el terrorismo de los narcotraficantes y ante el homicidio de los agentes, miembros de la Policía apelaron a retaliaciones y a sanciones ilegales: los casos de asesinatos de narcotraficantes, del uso de la tortura en la lucha contra los secuestradores, de la violencia contra los grupos ligados a la guerrilla, se volvieron más frecuentes, sobre todo entre 1980 y 1990, cuando más de 170 agentes de policía fueron asesinados por orden del narcotráfico. A esto se añadieron estereotipos discriminatorios contra los jóvenes: toda banda, gallada, barra o grupo juvenil se veía como presunto o posible grupo delincencial. Pero ni siquiera este esfuerzo policial radical tuvo resultados satisfactorios: la metodología era más intimidante que de apoyo a la justicia y de prevención, y a pesar de que se hicieron miles de detenidos, casi todos fueron liberados, pues la justicia no consideraba admisibles las pruebas aportadas, con lo que se reforzaron los atractivos y ventajas de la acción legal.

La estrategia de violencia aplicada por algunos sectores policiales fue arruinando la credibilidad de toda la Institución y su respaldo en los sectores populares, así como en muchos grupos políticos y empresariales. Las encuestas mostraban niveles de credibilidad en la Justicia y la Policía que a veces descendían por debajo del 10%. Mientras tanto, se reforzaba la simpatía con los enemigos del Estado, en particular con narcotraficantes como Pablo Escobar, quien llegó a ser visto en forma positiva por cerca del 50% de la población de los estratos populares.

Hacia un nuevo enfoque

En efecto, la magnitud de estos problemas requería un cambio de enfoque integral y completo. Muchas de las fallas eran de orden nacional y necesitaban un esfuerzo nacional: a ellas trató de enfrentarse el proceso de reforma constitucional, así como a estrategias concretas ligadas a los derechos humanos, a la reforma y fortalecimiento de la Justicia y a la transformación de la Policía.

Dentro de este marco, el Gobierno creó el **Programa Especial para Medellín**, en el desarrollo del cual la Consejería para Medellín y la Alcaldía Local generaron –en parte en forma coordinada y en parte como resultado de acciones relativamente independientes pero en buena medida promovidas por un diagnóstico similar-, una estrategia relativamente coherente de búsqueda de la convivencia en la ciudad.

Esta estrategia encontró una formulación expresa en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de comienzos de 1991, **Medellín: Reencuentro con el Futuro**, donde se hacía un diagnóstico que relacionaba los problemas de violencia de Medellín al efecto coyuntural del narcotráfico, pero también a los fenómenos estructurales de desigualdad y pobreza: ocupación desordenada del espacio, precariedad de vivienda y carencia de espacio público, limitaciones en la prestación de servicios sociales indispensables, falta de oportunidades para los jóvenes, crisis industrial y alto desempleo, insuficiencias de las políticas de seguridad y de protección de los derechos humanos. Igualmente,

daba especial importancia a los problemas generados por la ausencia de procesos adecuados de participación ciudadana, por la separación y el conflicto entre el Estado y la sociedad civil y por la crisis de los modelos éticos culturales que habían servido para mantener el tejido social tradicional de la ciudad.

Con base en este diagnóstico, el documento definía un programa de inversión social y movilización institucional y de la comunidad orientado a recuperar las condiciones para la convivencia en la ciudad (**Programa para la Convivencia Pacífica en Medellín**), centrado en las siguientes medidas:

1. Ampliar las oportunidades educativas mediante el aumento de los cupos, la construcción de nuevos centros educativos, el mejoramiento de las dotaciones básicas (talleres técnicos y vocacionales, bibliotecas, laboratorios, etc) de los colegios de secundaria en los barrios populares.
2. Promover el empleo juvenil a través de programas de capacitación empresarial y formación técnica breve así como de diversas formas de empresas solidarias y familiares.
3. Mejorar el espacio urbano en los barrios marginales con un plan denominado "Programa Integral de Mejoramiento y Desarrollo de Asentamientos Subnormales" (PRIMED) y la construcción de los llamados Núcleos de Vida Ciudadana, que pretendían reconstruir espacios de convivencia y encuentro en los barrios.
4. Promover las organizaciones ciudadanas estimuladas ante todo por la creación de un fondo para realizar proyectos de desarrollo barrial surgidos de las comunidades, y por el impulso a procesos de diagnóstico y debate de los problemas de los barrios, la ciudad y el Área Metropolitana.
5. Promover la organización juvenil y la mejora de las instalaciones culturales y deportivas.
6. Generar un cambio en la identidad y las imágenes de los sectores de la ciudad y luchar contra los estereotipos discriminatorios que definían las llamadas comunas, en particular las de la zona nororiental, y en especial a los jóvenes de estas áreas. Instrumento centro de ello sería un programa semanal de televisión para promover organizaciones y actividades de barrio, denominado Arriba Mi Barrio.
7. Fortalecer la Justicia y la seguridad pública, con base en el impulso a procedimientos, instituciones y valores que promovieran la solución conciliada de los conflictos entre las personas y la protección de los derechos ciudadanos.

Este proyecto contaba con asignaciones presupuestales para cuatro años cercanas, a precios de 1994, a los 20 mil millones de pesos, y esperaba obtener recursos de crédito externo –que efectivamente se lograron-, por otros 20 mil millones. Incluía también como parte del Programa, acciones previstas de otros organismos estatales por un valor total que superaba los 100 mil millones de pesos. Este volumen de inversión social se ha hecho efectivo en buena parte, y en los dos años iniciales del proyecto, 1990-92, representaron una parte decisiva, cercana al 50%, de la inversión social de los organismos municipales de Medellín y el Área Metropolitana.

Durante estos cuatro años los recursos han permitido hacer inversiones, algunas de ellas en ejecución, en unos 60 colegios ya existentes y en 7 colegios nuevos. Más

de 40 bibliotecas de barrio han recibido aportes significativos que incluyen la construcción de algunas de ellas. Cerca de 35 instalaciones deportivas han sido edificadas o mejoradas. Se hicieron dos grandes *Núcleos de Vida Ciudadana*, con áreas deportivas, sedes culturales, instalaciones educativas, guarderías, casas juveniles, oficinas y talleres comunitarios, y se están haciendo ya los diseños arquitectónicos para ocho núcleos de escala más reducida. En total, se han aprobado y aportado recursos para más de 500 pequeños proyectos promovidos por las comunidades, que han posibilitado inversiones muy variadas en áreas como recreación, parques infantiles, guarderías, servicios de salud, mejoramiento de escuelas, dotación de bibliotecas comunitarias, promoción de las organizaciones juveniles, etc. Se están capacitando conciliadores en equidad en los barrios populares y se realizan talleres de derechos humanos y de formación de dirigentes. En este momento unos 3 mil jóvenes reciben entrenamiento como empresarios o en áreas técnicas, y 15 casas juveniles sirven de núcleo para un número elevado de organizaciones juveniles. Más de 100 organismos no gubernamentales han recibido apoyo para sus programas sociales o han ejecutado, mediante contrato, algunos de los programas anteriores

Algunos de los programas más grandes, como los que involucran recursos de cooperación internacional, hacen hoy parte de la estructura municipal (es el caso del PRIMED), o serán ejecutados por entidades mixtas encabezadas por el Municipio como el Programa de Atención Integral a Jóvenes "Paisa Joven" que comenzará a operar a mediados de 1994.

Pero más importante que las inversiones físicas o el gasto concreto ha sido el proceso de participación ciudadana que ha generado y promovido. En efecto, la Consejería estimuló centenares de foros de barrios y comunas, en los que se debatieron los problemas de cada comunidad. Cada año se ha reunido, con participación de casi un millar de representantes, el seminario "Medellín: Alternativas de Futuro", en el que representantes juveniles, de los organismos comunales, de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, el sector empresarial y la administración pública, debaten las condiciones de la seguridad, el medio ambiente, el empleo, la educación o los derechos humanos en la ciudad. Las Mesas de Trabajo de este seminario se han ido convirtiendo en foros permanentes, que se reúnen al menos una vez al mes, para mejorar el diagnóstico de los problemas de Medellín y hacer un ejercicio de confrontación y debate. La Mesa de Trabajo por la Vida, que ha sido coordinada desde 1992 por la Iglesia, ha tenido un papel central en campañas educativas por la vida, en el diálogo entre grupos juveniles armados y en el impulso a las negociaciones entre las milicias populares y el Gobierno.

Este clima de participación se ha reforzado con la política de la Administración Municipal y del Concejo Municipal de realizar un amplio debate en los barrios antes de formular el plan anual de inversiones. La comunidad ha reaccionado buscando formas más complejas e integrales de debate, y en 1994 se están reuniendo los representantes de unas 200 organizaciones de la zona nororiental de la ciudad, tradicionalmente la parte más conflictiva, para diseñar el "Plan Integral de Desarrollo Nororiental" con la esperanza de someterlo a un amplio consenso con el Municipio.

Algunos elementos de evaluación

Han pasado un poco más de tres años desde el comienzo del Programa. Es imposible medir exactamente su impacto, pero existen elementos cualitativos que muestran su importancia en el proceso global de mejoría en la situación de Medellín, y en el cual han desempeñado un papel central otros factores como la

exitosa gestión de las administraciones municipales o la coyuntura económica global, que ha ampliado las oportunidades de empleo local.

No hay duda que la ciudad ha avanzado en el establecimiento de las condiciones para recuperar realmente la paz y superar la violencia. Existen las bases para una relación diferente entre la sociedad civil y el Estado, y para un proceso continuo que refuerce las formas organizativas y los procesos participativos de esa sociedad civil. Los valores de una ética de la convivencia, del respeto a la vida, de la solución dialogada de los conflictos, han entrado al lenguaje común de los sectores dirigentes, cultural, social o económicamente. Los pobladores de los barrios populares, si se mantiene un nivel de inversión social un poco superior al actual, lo que es posible, pueden enfrentar un horizonte realista que permita solucionar en forma rápida deficiencias como la carencia de cupos escolares secundarios, la atención preescolar, la mortalidad infantil prevenible, la desnutrición severa y la mortalidad materna. Tal horizonte de cambios positivos, si está acompañado de una administración municipal que haga de muchos de estos programas los proyectos propios de los habitantes de los sectores hasta hoy excluidos, es esencial para mantener contexto social de la convivencia

A pesar de este abanico de realizaciones, logros y perspectivas inmediatas, los niveles de violencia de la ciudad se mantienen muy elevados, por encima del promedio nacional y muy por encima de ciudades como Cali, Bogotá o cualquier otra capital de departamento, para no hablar de todas las ciudades similares del mundo. ¿Cómo entenderlo?

Quiero señalar tres elementos.

En primer lugar, todavía son muchas las limitaciones en el desarrollo de los programas de orden social y en el compromiso de la ciudadanía con la convivencia. Si bien se ha esbozado, aún no existe un proyecto de ciudad que permita vincular a estos esfuerzos a sectores más amplios del empresariado, de la Iglesia, de los grupos populares. Aunque la inversión ha sido alta, debió serlo más, y todavía es más fácil conseguir recursos del presupuesto de cualquier nivel territorial para reducir un nudo de tráfico que para educar a 10 mil adolescentes o rehabilitar mil drogadictos.

En segundo lugar, los factores de violencia no desaparecen al disminuir los niveles de insatisfacción o conflicto social, ni por el avance en las inversiones sociales. Pese a que el conjunto de políticas desarrolladas hasta la fecha ha logrado cambiar las tendencias e iniciar finalmente un proceso para reducir el número absoluto de homicidios –a fortiori, de la tasa de mortalidad por homicidios-, los elementos inerciales que mantienen condiciones y factores de solución violenta de conflicto (aun si son más reducidos y aislados), son muy fuertes. Existen aún centenares de grupos armados acostumbrados a enfrentar con violencia los conflictos, asiduos a la droga y al licor, y con una estrategia de vida centrada en los ingresos del delito, y las medidas de orden social, aunque limiten la tendencia a su crecimiento, no tienen un impacto muy directo sobre ellas: para el delincuente relativamente profesional, para el jalador de carros, el secuestrador o el apartamentero, el negociante de drogas y para muchos más, el hecho de que crezcan los cupos escolares y baje la mortalidad materna es del todo indiferente. Miles o decenas de miles de conciudadanos están armados, y las lógicas ansiosas de quienes se sienten amenazados o compiten por el poder siguen convirtiendo, con la ayuda de una media de aguardiente, pequeños incidentes en tragedias sangrientas. La mayoría de los habitantes de los barrios populares, aun si quiere la paz, se siente impotente y amedrentada frente a los delincuentes profesionales, y no se atreve a colaborar con procesos que puedan ponerlo en riesgo. Todavía la lógica de la acción colectiva

no da suficientes ventajas a la solidaridad ni la cooperación supera el marginamiento y la quietud.

Sin duda, continuar firmemente, sin acoso y sin desfallecimientos, con una política que siga subrayando la participación ciudadana, consolide la pedagogía de una ética de la convivencia y el diálogo en todos los niveles de la vida, generalice procedimientos para solucionar en forma conciliada los conflictos, cree oportunidades básicas culturales y laborales a los sectores críticos, impulse la organización popular y juvenil y estimule procesos que activen la cultura, el deporte y la recreación, puede llevar, en un plazo mediano, en uno o dos lustros, a una recuperación –gradual y lenta, pero continua- de la tranquilidad. La inversión social y los procesos educativos para la convivencia tienen un impacto en el largo plazo: siembran la paz, pero sobre todo, la que viviremos o no en dos o tres lustros.

Por ello, la tercera anotación: el desarrollo de estrategias concretas para prevenir y sancionar el delito ha sido todavía muy precario, para no hablar del tratamiento y rehabilitación de las personas vinculadas a actos violentos. Medellín tiene hoy menos policías por habitante que en 1990, y el nivel de impunidad por los delitos graves sigue siendo casi total: no creo que se sancionen siquiera el 5% de los responsables de homicidios. Aunque la desarticulación de las organizaciones terroristas del narcotráfico ha contribuido mucho a mejorar el ambiente de la ciudad, todavía la política social y cultural de convivencia no se puede apoyar en una estrategia eficiente dirigida a prevenir, sancionar y rehabilitar a los delincuentes.

Para lograr resultados a corto plazo no parece que existan alternativas a una política decidida y enérgica de mejoramiento en la forma como se cumplen las tareas policiales para prevenir, investigar el crimen, aplicar la justicia y rehabilitar o tratar a los delincuentes e infractores. Esto requiere un alto compromiso de las autoridades civiles, una voluntad de transparencia y reforma real de la Policía por parte de sus propias autoridades, el desarrollo de investigaciones serias de tipo criminológico y de seguimiento epidemiológico de todas las formas de violencia y delito, la generación de mecanismos e indicadores que evalúen y hagan seguimiento de la eficacia de la Justicia y la Policía, así como unos recursos presupuestales serios y proporcionales a la gravedad de los problemas de Medellín. Muchas de las medidas necesarias en el campo de la seguridad y la represión del delito se olvidan ante la tentación simplemente formalista de perseguir el delito agravando y endureciendo las penas, amenazando con la cárcel que no reciben los asesinos a quienes se fuman un pucho de marihuana.

La experiencia de Medellín muestra la importancia y el impacto posible de una política integral de convivencia, con elementos culturales y sociales como su eje. Pero deja muy en claro que aún en este terreno el Estado debe ser más firme, y que también debe tener una política hacia el crimen más integral y coherente de la que ha existido hasta ahora. No es posible aplicar eficientemente la represión del delito en una ciudad sin futuro; pero la construcción de una estrategia de futuro por la sociedad no derrota tampoco la violencia, si no reconstruimos integralmente la justicia.

Jorge Orlando Melo

Publicado en *Consenso, Revista de Cultura Política*, No 2, Bogotá, julio de 1994, páginas 7-17